23 de agosto de 2004

Recurso de Ilegalidad. Interpuesto por el Licenciado Roy Arosemena, en representación de la **Unión de Prácticos del Canal de Panamá**, contra el **Laudo Arbitral** fechado 28 de agosto del 2003, dentro del caso No. 03-006-ARB interpuesto por la Unión de Prácticos del Canal de Panamá vs. la Autoridad del Canal de Panamá.

Concepto.

Señor Magistrado Presidente de la Sala Tercera, de lo Contencioso Administrativo, de la Corte Suprema de Justicia:

Con el respeto acostumbrado acudimos ante esa Augusta Corporación de Justicia, con la finalidad de emitir nuestro concepto jurídico, en relación con el Recurso de Ilegalidad, interpuesto por el licenciado Roy Arosemena, enunciado en el margen superior del presente escrito.

Como es de su conocimiento, en este tipo de procesos actuamos en interés de la ley, en virtud de lo dispuesto en el artículo 5, numeral 7, Libro Primero, de la Ley N°38 de 31 de julio de 2000, que aprueba el Estatuto Orgánico de la Procuraduría de la Administración.

I. En cuanto a la pretensión

El demandante solicita a los señores Magistrados que integran el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que declaren ilegal el laudo arbitral fechado 28 de agosto de 2003, emitido por la árbitro designada conjuntamente por las partes en el caso No. 03-006-ARB interpuesto por la Unión de Prácticos del Canal de Panamá en contra de la Autoridad del Canal de Panamá.

II. La disposición legal que se estima infringida y el concepto de la violación, son los que a seguidas se copian:

Según los demandantes, se infringe la siguiente disposición legal:

El numeral 3, del artículo 100 de la Ley No. 19 de 11 de junio de 1997, que a la letra establece:

"Artículo 100. La Administración de la Autoridad tendrá derecho a:

1...

3. Asignar trabajo, tomar decisiones respecto a contrataciones de terceros y determinar el personal necesario para las actividades relacionadas con el funcionamiento del canal..."

Al explicar el concepto de la violación, el apoderado legal de la Unión de Prácticos del Canal de Panamá, en lo medular, señala lo siguiente:

"A nuestro juicio, al NEGAR la árbitro mediante el LAUDO ARBITRAL, que se recurre, la petición de la UNION DE PRACTICOS DEL CANAL DE PANAMA, sobre la base de lo dispuesto en el artículo 100 (numeral 3), de la Ley No. 19 de 1997, interpreta erróneamente esta norma, ya que el derecho de la administración de asignar personal para atender los asuntos que le conciernen, no puede justificar el desconocimiento de las obligaciones y responsabilidades de la ACP, consagradas en otras disposiciones de la referida excerta legal, que debieron ser tomadas en cuenta, como son: los artículos 4, 94, 89 y 106 de la Ley No. 19 de 1997, Orgánica de la Autoridad del Canal de Panamá..."

Con arreglo a estas normas, es claro que la Autoridad del Canal de Panamá está obligada a regir sus actuaciones conforme lo establece la ley, los reglamentos y las Convenciones Colectivas, por lo que el día 29 de noviembre de 2002, estaba obligada a dotar la guardia del Puerto de Cristóbal con dos (2) prácticos como mínimo, tal como lo establece la Convención Colectiva, en el artículo 17, Sección 29(h) suscrita por la Unión de Prácticos del Canal de Panamá, la Comisión del Canal de Panamá, y su

sucesora la Autoridad del Canal de Panamá..." (Cf. f. 33-35)

A nuestro juicio, el cargo de ilegalidad merece ser desestimado ya que no es cierto que la árbitro designada interpretara erróneamente el numeral 3 del artículo 100 de la Ley No. 19 de 1997, por las siguientes razones:

El artículo 100 de la Ley No. 97 in comento, establece que "la Administración tendrá derecho a asignar trabajo, tomar decisiones respecto a contrataciones de terceros y determinar el personal necesario para las actividades relacionadas con el funcionamiento del Canal", lo cual, se constata en autos, fue debidamente observado por la Autoridad del Canal de Panamá, tal y como se concluye en el Laudo Arbitral, con decisión favorable para la Autoridad del Canal de Panamá, por la árbitro designada Elizabeth Thomas de Sedda.

De la lectura de las piezas procesales incorporadas al expediente, se colige, contrario a lo expuesto por la parte actora, que la Administración cumplió con lo que establece la norma.

Por otro lado, es válido el argumento de la apoderada especial de la Autoridad del Canal de Panamá, sobre la norma aducida como violada, la cual no confiere derechos al Sindicato, ni a los trabajadores para decidir si se debe asignar un práctico a una tarea o actividad, aunque esto no debe significar, el inobservar o descuidar por parte de la Administración, las normas de seguridad que deben prevalecer en las funciones propias de la actividad del Canal de Panamá, que garanticen su eficiencia.

En otro análisis, la Convención Colectiva no exige, ante la inasistencia de uno de los prácticos asignados para una de

las guardias del Puerto de Cristóbal, que la Autoridad del Canal de Panamá, tenga que asignar otro práctico, precisamente porque la capacidad de la Administración es limitada, por las horas de descanso obligatorio que exige la Convención, siendo voluntad del práctico si acepta o no dicha asignación.

De igual forma, se acreditó en el expediente que las condiciones del Capitán Salazar, el día 29 de noviembre del 2003, al no se presentarse a laborar el práctico Francisco Tejada, no fueron afectadas, siendo oportuno recordar que la Convención Colectiva no contempla otorgar dos (2) días de descanso a un práctico por la cantidad de movimientos que realice durante su jornada de trabajo.

Por su parte el artículo 47 de la Ley Orgánica de la Autoridad del Canal de Panamá, prohíbe pagar o transferir dineros a persona natural o jurídica, estatal o privada, a menos que sea por servicios contratados, por tanto, tampoco se podía acceder a la solicitud de la Unión de Prácticos del Canal de Panamá.

Una vez confrontados los argumentos de las partes y de verificada la documentación que milita en el expediente, consideramos que el laudo arbitral no deviene en ilegal.

De la forma expuesta, contestamos el traslado del Recurso de Ilegalidad, interpuesto por el Licenciado Roy Arosemena, en representación de la Unión de Prácticos del Canal de Panamá, contra el Laudo Arbitral, fechado 28 de agosto del 2003, dentro del caso No. 03-006-ARB, interpuesto por la Unión de Prácticos del Canal de Panamá vs. la Autoridad del Canal de Panamá.

V. Pruebas: De las documentales presentadas, aceptamos aquellas que se encuentren debidamente autenticadas, así como las originales.

Del Señor Magistrado Presidente,

**Licda. Alma Montenegro de Fletcher
Procuradora de la Administración**

AMdeF/mcs

Licdo. Víctor L. Benavides P.
Secretario General